

Memoria, construcción de paz y turismo en el suroccidente colombiano

Por: Katherine Alejandra Duque Duque



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

[VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12209 de 2014]



Instituto de
Estudios
Interculturales



Especialización
en Jurisdicción
Agraria y Derecho
de Tierras



OBSERVATORIO
DE TIERRAS



Memoria, construcción de paz y turismo en el suroccidente colombiano

Por: Katherine Alejandra Duque Duque ¹

Resumen

El suroccidente colombiano condensa algunas de las paradojas más profundas de la paz territorial. Valle del Cauca, Cauca y Nariño son territorios atravesados por décadas de conflicto armado, desplazamientos, resistencias comunitarias y disputas por la tierra, pero también por memorias, prácticas de cuidado, economías locales y formas cotidianas de permanecer. Este artículo propone una reflexión sobre la relación entre memoria, construcción de paz y turismo después del Acuerdo Final de 2016. Su argumento central es que el turismo no produce paz por sí mismo. Puede contribuir al reconocimiento de las memorias, al encuentro entre visitantes y comunidades y a la valoración de los territorios, pero también puede mercantilizar el dolor, banalizar la violencia o imponer relatos externos. A partir de literatura sobre turismo y paz, memoria, turistización de memoriales y experiencias del suroccidente colombiano, se plantea que un turismo que aspire a acompañar la construcción de paz debe partir de la escucha, la participación comunitaria, los derechos humanos y el reconocimiento de memorias plurales. Más que convertir la guerra en atractivo, el desafío consiste en recorrer territorios que recuerdan sin reducirlos a aquello que les ocurrió.

1. Coordinadora línea de investigación aplicada en Movimientos Sociales, Interculturalidad y Construcción de Paz, Candidata a Doctora en Estudios para la Paz
Instituto de Estudios Interculturales - Pontificia Universidad Javeriana de Cali.



1.

Introducción: viajar por territorios que recuerdan

Hablar de turismo en territorios que han vivido la guerra, obliga a comenzar por una pregunta incómoda: ¿qué significa visitar un lugar donde otros han sufrido, resistido y reconstruido su vida? La pregunta es especialmente pertinente en el suroccidente colombiano. Para esta reflexión el espacio está conformado por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, territorios diversos en los que convergen ciudades, montañas, costas, ríos, territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, corredores de movilidad y economías locales. Son también territorios donde el conflicto armado y otras formas de violencia han dejado huellas profundas, aunque desiguales, y donde las comunidades han desarrollado diversas formas de resistencia, permanencia y reconstrucción de sus proyectos de vida.

Pensar estos territorios únicamente desde la violencia, sin embargo, supondría reproducir una mirada que los reduce al conflicto. Las experiencias locales muestran que las comunidades no solo recuerdan hechos traumáticos, sino que construyen sentidos sobre aquello que desean conservar, transformar y transmitir. El caso de Pance, en Cali, es ilustrativo: quienes participaron en la investigación de Medina, Bolaños y Barón (2019) construyen sus memorias articulando las experiencias del conflicto con el río, el cuidado ambiental, las actividades económicas y una identidad territorial que busca preservar a Pance como un lugar de paz para habitantes y visitantes. Así, la memoria no se limita a registrar aquello que ocurrió; también interviene en la manera como las comunidades se representan a sí mismas y proyectan su futuro.

Desde esta perspectiva, hablar de construcción de paz implica ir más allá de entenderla como el simple cese de la confrontación armada. Siguiendo la tradición inaugurada por Galtung (1969), la paz supone enfrentar no solo la violencia directa, sino también aquellas dimensiones estructurales y culturales que reproducen exclusiones, desigualdades y formas de legitimación de la violencia. El documento Aprovechar el potencial del turismo en lugares de conflicto histórico para promover la paz recupera esta perspectiva y subraya que la paz es un proceso complejo, no estático y necesariamente situado: puede avanzar y retroceder, adquirir significados distintos para diferentes actores y manifestarse de manera desigual entre territorios (Gobierno Vasco et al, 2020). En este sentido, construir paz supone también transformar relaciones sociales, ampliar posibilidades de participación, reconocer a las víctimas, fortalecer capacidades comunitarias y crear condiciones dignas para permanecer en los territorios.

Por ello, este artículo no parte de la idea de que el turismo sea, por sí mismo, una herramienta de paz. Establecer esa relación de manera automática sería simplificar tanto el turismo como la propia construcción de paz. Aunque desde hace varias décadas se ha planteado que el viaje puede favorecer el encuentro, ampliar horizontes, disminuir prejuicios y estimular el conocimiento mutuo, la literatura especializada reconoce que la relación entre turismo y paz continúa necesitando mayor evidencia empírica (Gobierno Vasco et al, 2020). Incluso los estudios que defienden su potencial insisten en que sus efectos dependen de cómo se conciba, quién participe en su desarrollo y qué relaciones produzca entre visitantes, comunidades y territorios.



Esta precaución es especialmente relevante en espacios marcados por conflictos recientes. El turismo puede facilitar encuentros y contribuir al reconocimiento de culturas, patrimonios y memorias, pero también puede reproducir desigualdades o transformar lugares sensibles en productos destinados fundamentalmente al consumo. Los estudios sobre turistización de memoriales en América Latina muestran precisamente esta ambivalencia: aumentar la presencia de visitantes puede contribuir a la difusión y sostenimiento de lugares de memoria, pero también generar procesos de banalización, ocultamiento o subordinación de las memorias a dinámicas económicas y de espectacularización (Gooycoola & Nuñez, 2022).

La pregunta, entonces, no es simplemente si el turismo “trae” paz, sino qué tipo de turismo, construido por quién, a partir de qué memorias, para beneficio de quién y bajo qué relaciones con el territorio puede contribuir a procesos de construcción de paz que ya existen. Esta formulación desplaza la mirada desde el turismo como actividad económica hacia el turismo como práctica social: una forma de encuentro con otros, con sus relatos y con territorios cuyos significados no comienzan con la llegada del visitante.

Por esa razón, en este artículo la memoria y la construcción de paz ocupan el centro de la reflexión. El turismo aparece como una posibilidad posterior: una práctica de movilidad, encuentro e interpretación que puede dialogar con ambas, pero que también debe reconocer límites. Esta elección busca evitar que las comunidades sean convertidas en escenarios de consumo o que sus experiencias de violencia sean tratadas como recursos turísticos. Los territorios no son únicamente destinos; son espacios habitados, recordados, apropiados y disputados. En ellos existen memorias múltiples y relaciones de poder que determinan qué se recuerda, qué se silencia y quién tiene legitimidad para narrar el pasado. La literatura sobre lugares de memoria advierte precisamente que la memoria y el patrimonio constituyen campos de disputa, pues quienes poseen mayor poder pueden influir sobre aquello que una sociedad recuerda y también sobre aquello que olvida (Gobierno Vasco et al, 2020).

Esta discusión adquiere una dimensión particular cuando el territorio comienza a recibir visitantes. Las comunidades pueden querer hacer visibles determinadas experiencias, reivindicar a sus víctimas o narrar procesos de resistencia y, al mismo tiempo, rechazar que el conflicto se convierta en la única identidad con la cual sean reconocidas. En Pance, por ejemplo, hacer memoria permite a sus habitantes integrar lo vivido sin quedar confinados a la condición de víctimas: sus relatos enfatizan su identidad como ribereños, emprendedores y defensores del territorio. Esta tensión resulta fundamental para pensar cualquier relación entre memoria y turismo (Medina, Bolaños y Barón, 2019).

¿Cómo visitar un territorio marcado por la violencia sin convertir su dolor en atractivo turístico? ¿Cómo reconocer las memorias de quienes lo habitan sin apropiarse de ellas? ¿Y cómo hacer del viaje una experiencia de reconocimiento y escucha, y no solamente de consumo?

Estas preguntas orientan la reflexión. El artículo dialoga con estudios sobre memoria, construcción de paz y turismo, con investigaciones realizadas en territorios como Pance, Inzá, Buenaventura y Samaniego, y con análisis críticos de los procesos de turistización de lugares de memoria en América Latina. Sitúa, además, la discusión en el horizonte político abierto por el Acuerdo Final de Paz de 2016, entendido no como el comienzo de la construcción de paz en los territorios, sino como un punto de inflexión dentro de procesos sociales y comunitarios que venían desarrollándose desde mucho antes.



El propósito, por tanto, no es elaborar un inventario de destinos ni ofrecer una fórmula para desarrollar un supuesto “turismo de paz”. Se propone una reflexión más acotada: examinar bajo qué condiciones el turismo puede acompañar procesos de memoria y construcción de paz en el suroccidente colombiano sin banalizar las violencias, sustituir las voces comunitarias ni reducir los territorios a su pasado traumático. Desde esta perspectiva, viajar por territorios que recuerdan supone también aprender a reconocer cómo sus habitantes interpretan lo ocurrido, qué desean transmitir a quienes llegan y, sobre todo, qué futuros están intentando construir.



2.

La paz no comenzó en 2016

El Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP constituye un punto de inflexión fundamental. Modificó el horizonte institucional de la paz, puso en primer plano asuntos como la reforma rural, la participación política, la reincorporación, las víctimas, la verdad y las garantías de no repetición, y abrió posibilidades para territorios que durante décadas habían sido leídos principalmente desde la guerra. Sin embargo, tomar 2016 como el inicio de la construcción de paz invisibilizaría una historia mucho más larga de organización social y resistencia.

En el suroccidente, distintas comunidades habían construido alternativas antes de la firma. El estudio de Marín Carvajal (2013) sobre mujeres rurales muestra experiencias en Inzá, Cauca; Samaniego, Nariño; y Buenaventura, Valle del Cauca. Allí aparecen mujeres campesinas y lideresas que fortalecen identidades, impulsan proyectos productivos, involucran a jóvenes, disputan espacios de decisión y desarrollan respuestas colectivas en contextos afectados por el conflicto. La autora propone leer estas iniciativas como alternativas no militares de construcción de paz y fortalecimiento de la sociedad civil.

Esta perspectiva desplaza la mirada. La paz deja de ser solamente un acuerdo entre actores armados y se convierte también en una práctica cotidiana: cultivar, organizarse, cuidar un río, defender un territorio, crear ingresos, mantener a los jóvenes alejados de dinámicas armadas, narrar lo sucedido y reclamar derechos. En Inzá, por ejemplo, las huertas, la economía solidaria y las estrategias de visibilización de las mujeres se articulan con autonomía e identidad campesina (Marín Carvajal, 2013). Es difícil comprender la paz territorial sin reconocer esas prácticas aparentemente pequeñas.

El posacuerdo tampoco significó el fin de las violencias. El caso de Pance advierte que, aun después de la firma con las FARC, persisten conflictos sociales, incertidumbres y rastros de terror en distintas regiones (Medina, Bolaños y Barón, 2019). Esta continuidad obliga a utilizar con cuidado expresiones como “posconflicto”. En muchos territorios es más preciso hablar de posacuerdo: cambió un marco político y se transformaron actores y dinámicas, pero la experiencia de la violencia no desapareció de manera homogénea.

La trayectoria política posterior también importa. Durante el gobierno 2022-2026 la implementación del Acuerdo de 2016 fue incorporada al Plan Nacional de Desarrollo como uno de los pilares de la política de paz. El cambio de gobierno iniciado en agosto de 2026 introduce un escenario distinto: la nueva administración ha anunciado el cierre de varios procesos de diálogo heredados de la política de “paz total” y ha enfatizado una concepción de paz asociada a autoridad, seguridad y sometimiento a la justicia (Presidencia de la República, 2026a). Para este artículo, más que evaluar tempranamente ese gobierno, interesa señalar una tensión: las políticas nacionales cambian con los ciclos electorales, mientras los procesos comunitarios de memoria, reparación y construcción de paz necesitan continuidad de largo plazo.

Esa tensión también aparece en las políticas turísticas. Un análisis reciente sobre Colombia concluye que el sector ha estado históricamente orientado hacia la competitividad y la mejora de la imagen internacional, mientras los componentes sociales, comunitarios y ambientales han tenido dificultades para traducirse en acciones sostenidas; el mismo estudio señala falta de cohesión y continuidad entre gobiernos (Barón, Cote y Acero, 2026). Esto es crucial para el



suroccidente: si el turismo quiere vincularse a la paz, no puede depender únicamente de campañas de promoción ni de la coyuntura de un gobierno.



3.

Memoria para la paz: recordar, olvidar y disputar

Hablar de memoria en sociedades atravesadas por la violencia exige precisar, primero, qué se entiende por ella. En este artículo, la memoria no se concibe simplemente como la capacidad individual de almacenar y recuperar información ni como una reproducción fiel de hechos ocurridos en el pasado. Se entiende, más bien, como un proceso social mediante el cual personas y colectivos interpretan el pasado desde las preguntas, necesidades y relaciones del presente. Recordar supone seleccionar, ordenar, narrar y otorgar significado a experiencias vividas; por ello, toda memoria contiene también silencios, énfasis, vacíos y olvidos.

Esta comprensión permite diferenciar, además, memoria e historia. Aunque ambas se ocupan del pasado, no operan de la misma manera. La historia aspira a reconstruir, contrastar e interpretar acontecimientos mediante procedimientos de investigación y fuentes verificables; la memoria, en cambio, está vinculada a la experiencia vivida, a la identidad, a los afectos y a los sentidos que individuos y grupos atribuyen a aquello que ocurrió. No son ámbitos necesariamente opuestos: pueden dialogar, tensionarse y complementarse. Pero reconocer su diferencia ayuda a comprender por qué un mismo acontecimiento puede generar memorias diversas e incluso contradictorias.

La memoria, además, nunca es enteramente individual. Las personas recuerdan desde marcos familiares, comunitarios, culturales e institucionales que permiten interpretar lo vivido. En el estudio sobre Pance, Medina, Bolaños y Barón (2019) señalan precisamente que las memorias adquieren significado en espacios intersubjetivos y colectivos, donde se construyen identificaciones entre un “yo”, un “nosotros” y unos “otros”. En ese proceso entran también en juego disputas sobre las representaciones y narrativas legítimas del pasado, atravesadas por relaciones de poder políticas, económicas, culturales y sociales.

De ahí que quizá sea más pertinente hablar de memorias, en plural. No existe una única manera de recordar un conflicto, ni todas las personas afectadas por la violencia elaboran sus experiencias de la misma forma. Víctimas, comunidades, instituciones, organizaciones sociales y actores políticos pueden construir interpretaciones distintas sobre los mismos acontecimientos. Algunas memorias alcanzan reconocimiento público; otras permanecen en espacios familiares o comunitarios; algunas son institucionalizadas mediante museos, conmemoraciones o monumentos, mientras otras sobreviven en relatos orales, rituales, prácticas productivas, canciones, cocinas, caminos o paisajes.

La memoria es, por tanto, también un campo de disputa. Recordar implica decidir qué acontecimientos merecen ser narrados, qué nombres son reconocidos, qué lugares son marcados y qué experiencias ingresan a la esfera pública. Al mismo tiempo, determinados relatos pueden quedar marginados, subordinados o silenciados. Los lugares de memoria materializan muchas de estas tensiones: pueden contribuir a dar sentido a una historia compartida y funcionar como formas de reparación y resignificación del espacio, pero también expresan decisiones sobre qué pasado debe hacerse visible (Gooycooela & Nuñez, 2022).

Esta dimensión política de la memoria resulta especialmente significativa en contextos de conflicto armado. No se trata solamente de recordar para impedir el olvido, sino de preguntarse quién recuerda, qué recuerda, desde dónde lo hace,



frente a quién y para qué. Hacer visibles determinadas experiencias puede contribuir al reconocimiento de las víctimas, a la dignificación de comunidades históricamente silenciadas y a la comprensión de las condiciones que hicieron posible la violencia. Pero una memoria convertida en relato único también puede clausurar otras voces o transformar una interpretación particular del pasado en verdad incuestionable.

Por eso, el olvido tampoco debe entenderse simplemente como lo contrario de la memoria. Recordar siempre implica seleccionar. No todo puede ser recordado al mismo tiempo ni de la misma forma. Algunos silencios pueden ser resultado del miedo o de relaciones de poder; otros pueden expresar formas de protección, duelo o la decisión consciente de no organizar la identidad personal y colectiva alrededor de una experiencia traumática. Esta distinción es importante porque evita asumir que toda ausencia de relato constituye necesariamente una falla de memoria.

El caso de Pance permite observar con claridad esta relación entre memoria, olvido e identidad. Medina, Bolaños y Barón (2019) muestran cómo las memorias del conflicto armado se articulan con la vida cotidiana, las tradiciones locales, el río, el bosque y las preocupaciones ambientales. Las experiencias de violencia no desaparecen de los relatos, pero tampoco ocupan todo el espacio narrativo. Los habitantes recuerdan el conflicto mientras reivindican otras dimensiones de su vida: el paseo, el sancocho, el trabajo, el cuidado del río y la posibilidad de imaginar a Pance como un territorio de tranquilidad y de paz.

En este sentido, hacer memoria puede ser también una forma de disputar identidades impuestas. Las personas entrevistadas en Pance no niegan lo vivido (Medina, bolaños y Barón, 2029), pero buscan representarse como empresarios, emprendedores y habitantes ribereños antes que quedar fijadas exclusivamente en la condición de víctimas. La memoria aparece entonces como una relación entre pasado, presente y futuro: permite elaborar lo ocurrido, pero también intervenir en aquello que una comunidad desea seguir siendo.

Esta idea es especialmente importante para la construcción de paz. La memoria no contribuye a la paz simplemente porque recuerde la violencia. Su potencial reside en que puede abrir espacios para el reconocimiento, la escucha y la elaboración pública de experiencias que durante mucho tiempo fueron negadas o silenciadas. Puede hacer visibles responsabilidades, dignificar a las víctimas, fortalecer identidades colectivas y transmitir aprendizajes a las nuevas generaciones. Pero para que cumpla esa función debe admitir pluralidad, contradicción y debate.

En otras palabras, una memoria orientada hacia la paz no debería buscar una versión completamente homogénea del pasado. La construcción de paz no exige que todos recuerden del mismo modo. Exige, más bien, construir condiciones para que memorias distintas puedan expresarse sin recurrir nuevamente a la violencia y para que las experiencias de quienes han sido históricamente excluidos encuentren reconocimiento público. Desde esta perspectiva, la memoria puede entenderse como una conversación social sobre el pasado que ayuda a definir cómo queremos convivir en el presente y qué violencias no queremos repetir en el futuro.

Esta relación entre memoria y paz permite, además, introducir una idea importante para el suroccidente colombiano: la memoria no reside exclusivamente en archivos, museos o monumentos. También está inscrita en los territorios. Los paisajes, ríos, caminos, casas, huertas, cementerios, cocinas y lugares de encuentro pueden adquirir significados vinculados con experiencias de violencia, resistencia y reconstrucción. Esto permite hablar no solo de lugares de memoria institucionalizados, sino de territorios que recuerdan.



Un río puede ser simultáneamente fuente de vida, lugar de paseo y escenario de miedo; una huerta puede constituir una actividad productiva y, al mismo tiempo, una práctica de resistencia; un camino puede conectar mercados y visitantes, pero conservar recuerdos de desplazamientos o controles armados. Las marcas del pasado no siempre son visibles. En ocasiones sobreviven en relatos, rutinas, ausencias, formas de nombrar los lugares o maneras de evitarlos. La memoria territorial se construye precisamente en esa superposición de significados.

Por ello, hablar de memoria para la paz no significa convertir todos esos espacios en memoriales ni hacer pública cada experiencia dolorosa. Significa reconocer la capacidad de las comunidades para decidir cómo relacionarse con su pasado y cómo desean transmitirlo. También significa reconocer que recordar puede ser una práctica de justicia, pero que las personas y los territorios tienen derecho a no ser definidos exclusivamente por las violencias que padecieron.

Por eso, un turismo que pretenda dialogar con la memoria y la construcción de paz debería partir de una ética de la escucha. Antes de preguntarse qué historia puede resultar atractiva para quien visita, debería preguntarse qué desean narrar quienes habitan el territorio, quién tiene legitimidad para hacerlo, qué memorias requieren protección y qué silencios deben respetarse. El desafío no consiste en transformar todas las memorias en productos turísticos, sino en crear formas de encuentro capaces de reconocer la complejidad histórica de los lugares sin apropiarse de ella.



4.

Valle del Cauca, Cauca y Nariño: pensar un corredor de memorias y resistencias

Más que tratar al Valle del Cauca, Cauca y Nariño como tres unidades aisladas, para efectos de esta reflexión resulta útil leerlos como un espacio de conexiones territoriales. No se trata de afirmar que constituyan una región homogénea ni que compartan una única experiencia del conflicto. Sus historias, composiciones sociales, economías y trayectorias políticas son diferentes. Sin embargo, las movilidades humanas, los corredores económicos, las relaciones urbano-rurales, los ecosistemas y las dinámicas de violencia desbordan las fronteras administrativas. También lo hacen las formas de organización, las resistencias y las iniciativas comunitarias de construcción de paz.

La idea de “corredor” se utiliza aquí, por tanto, como una herramienta de lectura y no como una categoría geográfica rígida. Permite observar continuidades y contrastes entre territorios donde el conflicto armado se expresó de maneras distintas, pero donde las comunidades desarrollaron capacidades para permanecer, organizarse, producir y reconstruir vínculos sociales. En ese sentido, el suroccidente puede leerse también a través de las relaciones que unen montaña, valle, costa y frontera, así como de los desplazamientos, intercambios y redes comunitarias que atraviesan estos espacios.

Las experiencias analizadas por Marín Carvajal (2013) permiten visualizar esta conexión con especial claridad. Su investigación reúne tres procesos de movilización de mujeres rurales y populares en Inzá, Cauca; Samaniego, Nariño; y Buenaventura, Valle del Cauca. Aunque surgen en contextos diferentes, las tres experiencias muestran cómo las mujeres construyen respuestas colectivas frente a desigualdades de género, precariedades económicas y efectos del conflicto armado. En Inzá, las mujeres campesinas se organizan alrededor de la defensa de sus derechos, el fortalecimiento de su identidad cultural y la valoración del territorio; en Samaniego, proyectos productivos impulsados por mujeres buscan también involucrar a jóvenes y alejarlos de grupos armados y de economías asociadas a cultivos ilícitos; y en Buenaventura, mujeres afectadas directamente por pérdidas familiares derivadas de la violencia se abren espacio en escenarios comunitarios de decisión.

Estas experiencias permiten comprender que la construcción de paz no se expresa solamente en negociaciones formales o programas estatales. Puede aparecer en prácticas mucho más cotidianas: organizar una asociación, producir alimentos, generar ingresos, acompañar a jóvenes, defender derechos o construir espacios donde las mujeres puedan hablar y tomar decisiones (Marín, 2023). En las experiencias estudiadas, los proyectos productivos no cumplen únicamente una función económica.

Del mapa de la guerra a una geografía de resistencias

Leer conjuntamente estos territorios permite hacer un desplazamiento importante. Durante mucho tiempo, muchas zonas del suroccidente han sido representadas en mapas nacionales a partir de indicadores de violencia, presencia de actores armados, cultivos ilícitos, desplazamiento o pobreza. Sin desconocer esas realidades, una perspectiva centrada en memoria y paz permite construir otra geografía: una geografía de organizaciones, cuidados, aprendizajes, resistencias y proyectos comunitarios.



Esto no significa sustituir una narrativa negativa por otra exclusivamente celebratoria. Las resistencias tampoco deben romantizarse. Las propias experiencias de las mujeres muestran contradicciones: el empoderamiento puede generar nuevas capacidades y, al mismo tiempo, aumentar las cargas de trabajo; las organizaciones pueden fortalecerse mientras el conflicto restringe sus encuentros; un proyecto productivo puede abrir oportunidades sin resolver desigualdades estructurales.

Por ello, hablar de “territorios que resisten” no significa presentar comunidades heroicas capaces de resolver por sí mismas problemas que también comprometen responsabilidades estatales y estructuras económicas más amplias. La resistencia puede ser agotadora, precaria y costosa. Puede coexistir con miedo, pérdidas, frustraciones y demandas no resueltas. Reconocerla no significa idealizarla, sino entender la capacidad de acción de personas que se niegan a ser definidas exclusivamente por la violencia.

El cuidado como posible hilo conductor

A partir de estos casos, el cuidado puede funcionar como un hilo conceptual especialmente fértil para conectar memoria, paz y turismo. Cuidado del agua en Pance; cuidado de la tierra y de las semillas en los procesos campesinos; cuidado de jóvenes frente al reclutamiento y las economías ilícitas; cuidado de las memorias de las víctimas; cuidado de los vínculos comunitarios; cuidado de la identidad y de las prácticas culturales.

Este enfoque amplía la idea de resistencia. No toda resistencia adopta la forma de confrontación pública. Algunas prácticas resisten precisamente porque sostienen la vida: cocinar, cultivar, educar, reunirse, mantener un río limpio, transmitir una historia o crear condiciones para que alguien pueda permanecer en su comunidad.

Aquí puede entrar el turismo con mayor sentido. Si se construye desde procesos territoriales, el visitante no tendría que llegar únicamente a conocer “lo que pasó”, sino a comprender cómo se ha sostenido la vida a pesar de lo ocurrido. Esto cambia radicalmente la experiencia. El centro ya no sería el escenario del horror, sino las relaciones entre memoria, territorio y reconstrucción de la vida cotidiana.

No se propone, por tanto, diseñar una “ruta de la guerra” que conecte lugares en función de hechos violentos. Una iniciativa de este tipo correría el riesgo de convertir el sufrimiento en criterio de atractividad y de producir una cartografía externa sobre comunidades que no necesariamente desean narrarse de ese modo. Los estudios sobre lugares de memoria muestran que la transformación de estos espacios en recursos turísticos es siempre ambivalente y puede alterar los significados que las comunidades atribuyen al territorio (Goycoolea y Nuñez, 2022).

Si en algún momento surgieran recorridos, experiencias o circuitos relacionados con estas memorias, deberían nacer de procesos locales y construirse con participación comunitaria. Su pregunta inicial no tendría que ser “¿qué podemos mostrar al turista?”, sino “¿qué queremos compartir, para qué queremos hacerlo y bajo qué condiciones?”.

Desde esta perspectiva, el visitante deja de ser un consumidor de historias y puede convertirse en alguien dispuesto a escuchar. No llega únicamente a observar cicatrices de la guerra, sino a comprender que detrás de cada territorio existen decisiones cotidianas para sostener la vida y producir futuro.

El suroccidente colombiano puede recorrerse no solo como una geografía marcada por la guerra, sino como una geografía de memorias, resistencias y cuidados.



5.

¿Qué condiciones tendría un turismo que acompañe la construcción de paz?

Después de revisar las relaciones entre memoria, territorio, resistencia y turismo, una cuestión se vuelve central: ¿bajo qué condiciones una práctica turística podría acompañar realmente procesos de construcción de paz? La formulación es deliberada. No se plantea qué tendría que hacer el turismo para “producir” paz, porque ello supondría atribuirle una capacidad que no posee por sí solo. La paz depende de transformaciones políticas, sociales, económicas y territoriales mucho más amplias. El turismo puede, en determinados contextos, acompañarlas, fortalecerlas o hacerlas visibles; también puede debilitarlas si reproduce exclusiones, mercantiliza las memorias o desplaza la capacidad de decisión de quienes habitan los territorios.

La literatura sobre turismo en lugares afectados por conflictos insiste precisamente en esta naturaleza condicional. Los beneficios potenciales del turismo —encuentro, aprendizaje, reconocimiento, generación de ingresos o sostenimiento de lugares de memoria— no aparecen automáticamente con la llegada de visitantes. Dependen del modo como se conciben y gestionan las experiencias. De allí la necesidad de un enfoque sensible a la paz, capaz de articular turismo, derechos humanos, memoria, patrimonio, educación y sostenibilidad (Gobierno Vasco et al, 2020).

En ese sentido, más que formular una receta, pueden proponerse ocho condiciones orientadoras. No constituyen una certificación ni un modelo aplicable de manera idéntica en todos los territorios. Funcionan mejor como preguntas éticas y políticas que deberían acompañar cualquier iniciativa que pretenda vincular turismo, memoria y construcción de paz.

La primera condición es la capacidad de decisión territorial. La comunidad no debería limitarse a ser consultada después de que la experiencia turística ya ha sido diseñada. Su participación debe incluir la definición de qué se narra, quién lo narra, qué lugares pueden ser visitados, qué tiempos se respetan, qué imágenes pueden registrarse y cuáles aspectos deben permanecer fuera de la circulación turística.

La segunda condición es la dignidad de víctimas y personas afectadas. Las historias de vida no son insumos turísticos gratuitos. Una persona que ha sufrido desplazamiento, pérdida de familiares, violencia sexual, amenazas o persecución no puede convertirse en un “atractivo humano” encargado de producir emociones para el visitante. La participación debe ser voluntaria, informada y susceptible de ser interrumpida.

La tercera condición es reconocer la pluralidad y el conflicto de las memorias. Una experiencia asociada a la paz no debería producir una narración única, perfectamente coherente y tranquilizadora. Los conflictos dejan interpretaciones diferentes y, muchas veces, incómodas.

La cuarta condición es que los beneficios permanezcan en el territorio y fortalezcan capacidades locales. Una iniciativa no puede considerarse favorable a la construcción de paz solamente porque genere movimiento económico.

La quinta condición es el cuidado territorial y ambiental. En el suroccidente colombiano esto resulta particularmente importante porque los territorios donde se construyen memorias son también territorios de agua, biodiversidad, producción campesina y prácticas culturales.



La sexta condición es una mediación pedagógica rigurosa. Una experiencia de memoria no debería diseñarse para producir impacto emocional por sí mismo. El sufrimiento puede generar conmoción, pero la conmoción sin contexto puede convertirse rápidamente en espectáculo.

La séptima condición es reconocer al visitante como sujeto responsable. La ética del turismo no puede recaer exclusivamente sobre comunidades, operadores o instituciones. Quien visita también participa en la producción de significados.

La octava condición es reconocer los límites del turismo. Quizás esta sea la condición más importante. El turismo no sustituye la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de seguridad, la restitución de tierras, la reforma rural, la educación, la salud ni las políticas sociales.



6.

A modo de cierre: territorios que recuerdan, territorios que siguen construyendo paz

El cambio de gobierno de 2026 vuelve visible una tensión que atraviesa toda esta reflexión: los ciclos políticos son más cortos que los procesos territoriales de memoria y construcción de paz. Las prioridades nacionales pueden modificarse rápidamente, así como los lenguajes utilizados para nombrar la paz, la seguridad o el desarrollo.

Esta incertidumbre reafirma una idea central: la construcción de paz no puede depender exclusivamente de un periodo presidencial. El Acuerdo Final de 2016 continúa siendo una referencia fundamental porque situó en el debate nacional a las víctimas, los territorios, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

En el suroccidente colombiano, la paz se construye también en espacios cotidianos: en mujeres que organizan huertas y economías solidarias; en comunidades que protegen ríos y ecosistemas; en víctimas que deciden cuándo y cómo narrar lo vivido; en jóvenes que encuentran alternativas a la vinculación armada; y en organizaciones que defienden su derecho a permanecer en el territorio.

La memoria ocupa un lugar decisivo en estos procesos. No únicamente porque permite reconstruir lo ocurrido, sino porque interviene en la forma como una comunidad decide representarse en el presente y proyectarse hacia el futuro.

Esta perspectiva permite entender que recordar no significa permanecer atrapado en la violencia. La memoria puede contribuir a la no repetición precisamente cuando ayuda a reconocer el daño sin convertirlo en la única identidad posible del territorio.

Es en este punto donde el turismo adquiere sentido dentro de la reflexión. Su contribución a la paz no debería medirse solamente por la llegada de visitantes ni por los ingresos producidos. Importa también aquello que deja después de la visita: qué relaciones fortaleció, qué memorias ayudó a reconocer, qué capacidades permanecieron en la comunidad y qué formas de cuidado promovió sobre el territorio.

Desde esta perspectiva, Valle del Cauca, Cauca y Nariño no son simplemente territorios que dejaron atrás la guerra ni destinos emergentes del posacuerdo. Son territorios que recuerdan mientras continúan construyendo paz. Si el turismo quiere acompañar ese proceso, tendrá que hacerlo sin apropiarse de sus memorias, sin sustituir sus proyectos y reconociendo que quienes habitan el territorio deben conservar el derecho a decidir cómo quieren ser recordados, visitados y narrados.



Referencias bibliográficas

- Barón-Chivara, J. A., Cote Daza, S. P. y Acero López, H. M. (2026). Colombia: políticas turísticas para el posacuerdo.
- Fernández Poncela, A. M. (2014). Emociones, identidad, turismo y vida en Huasca (México). *Investigaciones Turísticas*, 8, 23-45.
- Gobierno Vasco, Gobierno de Flandes, Gobierno de Irlanda del Norte, Universidad del País Vasco y Universidad del Ulster. (2020). Aprovechar el potencial del turismo en lugares de conflicto histórico para promover la paz.
- Goycoolea Prado, R. y Núñez Martí, P. (2023). Procesos de turistización de memoriales en Latinoamérica: ¿oportunidad o amenaza para la reparación?
- Marín Carvajal, I. (2013). Resistencias desde la huerta. Movilización de mujeres en zonas rurales del suroccidente colombiano. *La manzana de la discordia*, 8(2), 89-107.
- Medina-Vargas, I. M., Bolaños-Martínez, Y. y Barón, L. F. (2019). Paseo, sancocho y río. Memorias y olvidos sobre el conflicto armado en Pance, Cali. *Revista CS*, 28, 47-85.
- Presidencia de la República de Colombia. (2026a, 30 de agosto). Gobierno del Presidente De La Espriella pone fin a tres procesos de diálogo con grupos armados.
- Presidencia de la República de Colombia. (2026b, 5 de septiembre). Gobierno destina \$40.000 millones para recuperar microempresas y reactivar el turismo en el Valle del Cauca.
- Schenkel, É. y Cañada, E. (eds.). (2026). Políticas turísticas en América Latina y el Caribe: perspectivas comparadas para un análisis crítico. CLACSO / Alba Sud.
- Alba Sud. (s. f.). Memoria y reconciliación: ¿es el turismo un instrumento eficaz para la paz?
- Alba Sud. (s. f.). Turismo y memoria: ideas y reflexiones para avanzar hacia un horizonte poscapitalista.
- CoPaLa. (2019). Boletín Construyendo Paz Latinoamericana, 10. Seminario en Resolución Internacional de Conflictos y Construcción de Paz-México



Memoria, construcción de paz y turismo en el suroccidente colombiano

Por: Katherine Alejandra Duque Duque



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

[VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12230 de 2016]



Instituto de
Estudios
Interculturales



Especialización
en Jurisdicción
Agraria y Derecho
de Tierras



OBSERVATORIO
DE TIERRAS